

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	MIRYAM VALENCIA DE SÁNCHEZ
DEMANDADAS	COLPENSIONES
RADICADO ÚNICO NACIONAL	05001310501220140181301
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo conexo
DECISIÓN	Confirma, Modifica y Revoca
ACTA DE DECISIÓN	063 de 2023

Medellín, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte ejecutada, frente al auto del que ordenó continuar adelante con la ejecución.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Ante solicitud elevada por la parte ejecutante, el dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) se profirió mandamiento de pago en contra de Colpensiones, y a favor de la señora Miryam Valencia de Sánchez, así:

“Librar mandamiento de pago en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, representada legalmente por su presidente, doctor Mauricio Olivera González, o quien haga sus veces, y a favor de la señora MIRYAM VALENCIA DE SÁNCHEZ, para que en el término que más adelante se indicará proceda a pagarle lo siguiente:

- *Por la suma de \$94.151.495,54 como retroactivo de la pensión de sobreviviente causado del 17 de septiembre de 1997 al 31 de agosto de 2008.*
- *Las mesadas pensionales desde el 1° de septiembre de 2008 en cuantía de \$822.14.24, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, sin perjuicio de los incrementos legales a futuro.*
- *Sobre el valor de las mesadas retroactivas, la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se realice el pago.*
- *Por la suma de \$5.500.500 correspondiente a costas liquidadas en casación y*
- *Por la suma de \$6.800.400 por las costas liquidadas en primera instancia.*

SEGUNDO: Para el efecto, se concede a la ejecutada, un término de cinco (5) días para cumplir con la obligación o de diez (10) días para proponer excepciones si lo estima del caso. Ello de conformidad con Arts. 431 y 442 del CGP, aplicables en materia laboral por la remisión prevista en el art 145 del CPTSS.”

Notificado el mandamiento de pago, la ejecutada interpuso las excepciones de “Prescripción, pago y compensación”.

Señalada fecha para la audiencia para resolver las excepciones propuestas, una vez se corrió traslado a la ejecutante, se decidió, por la Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín:

“PRIMERO: DECLARAR NO probadas las excepciones de PRESCRIPCIÓN, PAGO y COMPENSACIÓN propuestas por ACP COLPENSIONES, tal como se indicó en la parte motiva.

SEGUNDO: SEGUIR la ejecución por los siguiente es conceptos:

- \$94.151.495,54 por concepto retroactivo pensional causado entre el 17 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 2008.

- \$22.823.851 por concepto de mesadas pensionales causadas desde el 01 de septiembre de 2008 al 25 de junio de 2010.

- Intereses moratorios sobre el valor de las mesadas retroactivas no canceladas, liquidados desde su causación y hasta el momento del pago total.

TERCERO: CONDENAR en costas de la ejecución a la entidad ejecutada, se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.”.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión la parte ejecutada Colpensiones, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación indicando su reparo referente a los intereses moratorios, así como las costas del proceso, pues refiere que los intereses sólo pueden causarse hasta el momento de la muerte de la señora MIRYAM VALENCIA DE SÁNCHEZ, es decir hasta el 25 de junio del año 2010, toda vez que con conocimiento que, la antes citada, había fallecido, se requirió a los herederos para que, allegaran la información suficiente para el pago a los mismos, pero sólo en el año 2015 se presentó el ejecutivo sin que la entidad pudiese efectuar el pago correspondiente a los herederos al no acreditar tal condición. Estima que tampoco debe condenarse en costas, pues no se pagó la obligación por desidia de los herederos y la entidad, ha obrado de buena fe.

La Juez Doce Laboral del Circuito de Medellín, decidió no reponer la decisión tomada y conceder el recurso de alzada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte ejecutante, en término oportuno, presentó sus alegaciones a la Sala reiterando sus puntos de apelación, e indicando que, en este caso, lo pretendido no era precisamente ejecutar el cumplimiento de una sentencia judicial, donde sirviera de título la sentencia, sino el pago de manera ejecutiva de una suma de dinero única en favor de los herederos.

Solicitó se tuviera en cuenta la buena fe de la entidad en solicitarle los documentos a los herederos, quienes han tenido clara desidia en el reclamo oportuno de los dineros a favor de la señora MIRYAM VALENCIA DE SÁNCHEZ.

El ejecutante presentó no presentó alegatos.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar, si los intereses moratorios, del artículo 141 de la ley 100 de 1993, continúan su causación con posterioridad a la muerte del beneficiario de la prestación que la causa, ello en favor de los herederos de éstos, y como problema jurídico asociado se examinará si debe condenarse en costas dentro del ejecutivo.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Acorde con el inciso primero del artículo 100 del CPT y de la S.S. *“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”*.

Ahora, conforme al artículo 422 del CGP¹, aplicable por analogía al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPT y de la S.A., el acreedor puede demandar por la vía ejecutiva las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que procedan del deudor o de su causante, y sean plena prueba contra este. Dichos documentos se clasifican como títulos ejecutivos, los cuales debe probar la existencia de una prestación en beneficio de un sujeto. Esto es, el deudor está obligado frente a su acreedor a ejecutar una conducta de dar, hacer o de no hacer de manera clara, expresa y actualmente exigible.

Los títulos ejecutivos deben poseer condiciones formales y sustanciales, conforme a lo indicado por la jurisprudencia constitucional²:

*“Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación **(i)** sean auténticos y **(ii)** emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme³.”⁴*

Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos.

¹ ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

² Sentencia T-747 del 2013

³ CONSEJO DE ESTADO, Sentencia No. 85001-23-31-000-2005-00291-01(31825), del 24 de Enero de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

⁴ Sentencia T-283 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

De cara a las condiciones sustanciales que debe reunir el título ejecutivo, es clara la obligación cuando están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan; es expresa cuando la obligación es nítida y manifiesta en la redacción del documento; y es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición.

Así mismo, frente a los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos consignados en el artículo 422 del CGP, en la sentencia STC3298-2019, Radicación n.º 25000-22-13-000-2019-00018-01 del 14 de marzo de 2019, indicó la Sala de Casación Civil de la CSJ lo siguiente:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”.

De lo anterior se colige que, mediante el proceso ejecutivo solo se puede pretender el pago de obligaciones que estén expresa y claramente contenidas en el título que se pretende hacer valer, sin que haya lugar a interpretaciones o elucubraciones al respecto.

CASO CONCRETO

En sentencia de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, y quedó incólume ante recurso de casación presentado, se indicó:

“CUARTO: Se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagarle a la señora MIRYAM VALENCLIA DE SANCHEZ con c.c. 32.304.545, sobre el valor de las mesadas retroactivas reconocidas, la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el retroactivo pensional.”

Por su parte, en reciente providencia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, SL1020-2022 recordó:

“En relación con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, resulta procedente su pago por el no reconocimiento y satisfacción oportuna de la prestación pensional, en tanto esta Corporación ha sostenido que los mismos emergen sin que tenga relevancia alguna establecer juicios de valor referente a la existencia de la «buena fe» por parte del obligado, es decir, proceden aun cuando la entidad hubiera tenido el convencimiento que no era dable el reconocimiento de la prestación deprecada, toda vez que su naturaleza es «resarcitoria» y no «sancionatoria».

La ley 100 de 1993, introdujo en su artículo 141 la previsión de la causación de intereses moratorios ante el retardo en el pago de mesadas pensionales, el cual se ha interpretado de forma pacífica, por vía jurisprudencial, que este se produce, además, cuando vence el plazo legal para el reconocimiento de la prestación sin respuesta de la entidad o con una negativa apartada de la ley, empero siempre en consideración al pensionado, esto es a la persona que es destinataria del reconocimiento hecho o que se debió hacer ante el cumplimiento de las condiciones legales para el efecto, pero otra cosa sucede cuando los créditos derivados del derecho pensional tiene como causa la *herencia* o *legado*, ello en razón que a pesar de reconocerse como un activo de la respectiva masa, deja de ser una garantía pensional, con la protección especial que ello implica, para beneficiar a terceras personas con una vocación especial legal que no es la propia del sistema pensional ni laboral, sino un llamamiento de la legislación civil.

Corolario a ello, los intereses moratorios no pueden generarse más allá de la naturaleza resarcitoria que tienen respecto al pensionado, es decir, en fecha posterior al fallecimiento de la señora MIRYAM VALENCIA DE SÁNCHEZ, por lo cual, le asiste razón a la procuradora judicial de la parte ejecutada, debiéndose modificar el numeral Segundo, respecto a continuar la ejecución, por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 hasta el 25 de junio del año 2010, fecha de fallecimiento de la señora Valencia de Sánchez, conforme a página 358 del expediente digital.

Respecto a las costas del proceso, son los gastos que debe hacer la parte vencida en el proceso, e incluyen:

- 1) Las expensas judiciales – entendidas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial).
- 2) Las agencias en derecho – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios).

La condena en costas, se encuentra regulada por el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral conforme lo dispone el artículo 145 de nuestro estatuto procedimental del trabajo y la seguridad social.

No obstante, lo anterior, ha de observarse como particularidad de la presente acción, que a pesar de resultar la parte recurrente en alzada vencida en el trámite del proceso ejecutivo, lo que ocasionó el accionar de la parte ejecutante fue su propia actitud, esto es el haber hecho caso omiso a la solicitud de COLPENSIONES de allegar unos requisitos para proceder a realizar el pago en favor de herederos de las respectivas acreencias que tienen como causa una decisión judicial ejecutoriada.

Los requerimientos de la ejecutada no se tornan caprichosos, pues no tiene visos de arbitrariedad, estos requisitos pueden calificarse de necesarios dada la entidad del pago a realizar, al tiempo que la protección de los recursos de los herederos, por lo que estaba en manos de los ahora accionantes el satisfacerlos y así no tener la necesidad de accionar la jurisdicción para obtener la satisfacción de la obligación que se encontraba insoluta e favor de la causante al momento de su fallecimiento, lo que lleva a esta Sala de Decisión a considerar que es procedente la no imposición de costas en contra de la ejecutada, y por tanto revocar la decisión también en dicho punto.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: Modificar el numeral segundo del auto recurrido el cual, quedará así:

“SEGUNDO: SEGUIR la ejecución por los siguiente es conceptos:

- \$94.151.495,54 por concepto retroactivo pensional causado entre el 17 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 2008.

- \$22.823.851 por concepto de mesadas pensionales causadas desde el 01 de septiembre de 2008 al 25 de junio de 2010.

- Intereses moratorios sobre el valor de las mesadas retroactivas no canceladas, liquidados desde su causación y hasta el 25 de junio de 2010”.

SEGUNDO: Revocar la imposición de costas dentro del trámite ejecutivo.

TERCERO: Dejar incólume la decisión en todo lo demás, al no haber sido objeto de revisión vía apelación.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

QUINTO: Reconocer personería a la doctora Daniela Echeverry García con T.P. número 275.505 del CSJ, para llevar la representación de Colpensiones.

SEXTO: Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 042 del 10 de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49ff8e80c550222d80441b81d3e5f5d34f6a7d5a847f64980acf5d1bc4a5dffb**

Documento generado en 09/03/2023 02:19:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>